

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### RAMA JUDICIAL

### JUZGADO VEINTIOCHO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO

Bogotá D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veinte (2020)

#### I. OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Decidir la acción de tutela promovida por **CAMILO MORALES CARRIOZA** en contra de la **SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PAIPA**, y en donde se vinculó al **SIMIT**, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la petición y debido proceso.

#### II. HECHOS

Indicó que el 8 de agosto de 2020, recibió contestación a una petición que había radicado ante la Secretaría de Tránsito y Transporte de Paipa, mediante la cual le notificaban que se había decretado la prescripción de los comparendos que tenía a su nombre de los años 2009, 2010 y 2011, y en donde se informaba que tal determinación se había informado al SIMIT para la debida actualización de la base de datos.

No obstante, que a pesar de que ha pasado mas de un mes, no se ha actualizado esta información en el sistema de SIMIT y aun le figuran las infracciones que le fueron impuestas en estos tres años; motivo por el cual, solicita se amparen su derecho fundamental a la petición y debido proceso y se ordene a la accionada que proceda a la actualización de la correspondiente plataforma de información.

### **III. ACTUACIÓN PROCESAL Y RESPUESTA**

El 23 de octubre del 2020 se admitió la tutela y se ordenó vincular al trámite constitucional al SIMIT; así mismo a correr traslado de la demanda y sus anexos a la entidad accionada y vinculada, acto que se surtió con correo electrónico de la misma fecha.

La directa accionada decidió guardar silencio al requerimiento que se le hiciera; por otra parte, la entidad vinculada en respuesta remitida al llamado que se le hiciera para que ejerciera su derecho a la contradicción y defensa, señaló que i) se revisó el estado de cuenta del accionante, evidenciando que las ordenes de comparendo declaradas prescritas por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Paipa, ya fueron actualizadas en el sistema SIMIT, *“debido a que estas no se encuentran reportadas en el estado de cuenta”* y se les aplicó la respectiva novedad de *“declaración de prescripción”*; ii) de tal suerte, que la presente acción constitucional carece de objeto pues nos encontramos frente a un echo superad, motivo por el cual, solicitaron declarar la improcedencia de la acción de tutela y exonerar de cualquier responsabilidad a esa entidad.

### **IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS JURIDICOS**

La tutela es un instrumento jurídico confiado por la Constitución a los jueces, cuya justificación se contrae a brindar a quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos fundamentales que estima han sido burlados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los particulares de manera excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines esenciales del Estado, el cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta Política.

#### **4.1. Problema Jurídico:**

Compete establecer si en este caso, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Paipa, vulneró el derecho de petición del accionante, quien adujo haber presentado una petición, la cual si bien fue respondida de manera favorable al decretársele la prescripción de unos comparendos que se encontraban a su nombre; no se habían realizado por parte de esta autoridad la respectiva actualización de los comparendos en el aplicativo del SIMIT, evidenciándose así la configuración de una respuesta y un trámite incompleto.

#### **4.2. Procedibilidad**

##### **• Legitimación Activa**

De conformidad con el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ser ejercida i) directamente por la persona afectada o a través de representante, ii) por el Defensor del Pueblo y los personeros municipales, iii) mediante agencia oficiosa cuando el titular de los derechos fundamentales no está en condiciones de promover su propia defensa, circunstancia que debe manifestarse en la solicitud.

En el presente evento, se satisface la primera de las posibilidades dado que el accionante **CAMILO MORALES CARRIOZA**, actúa a nombre propio en defensa de su derecho fundamental de petición, por ello se encuentra legitimado para actuar.

##### **• Legitimación Pasiva**

Según lo establecido en los artículos 1 y 5° del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier acción u omisión en que incurra una autoridad pública, y los particulares en algunos casos.

Teniendo en cuenta que la entidad accionada es una entidad pública, no es necesario realizar consideración alguna al respecto y es posible, tener por cumplido el criterio de la legitimación por pasiva.

- **Inmediatez**

La acción de tutela fue avocada en esta ciudad el 23 de octubre de 2020, mientras que el derecho de petición que se aduce vulnerado fue contestado por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Paipa, el 8 de septiembre de 2020; en este punto debe ponerse de presente que en virtud de que la respuesta otorgada llevaba consigo la obligación de actualización de información en plataforma digital del SIMIT, se advierte que el accionante hizo lo propio esperando aproximadamente un mes sin evidenciar actualización alguna.

Así las cosas, se tiene que la acción de tutela fue interpuesta en un término razonable que cumple con el requisito de inmediatez.

- **Subsidiariedad**

A voces del artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela *"solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable"*. Disposición desarrollada por el artículo sexto del Decreto 2591 de 1991, que ratifica la procedencia de la acción de tutela cuando las vías ordinarias no tengan cabida o cuando no resulten idóneas para evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable.

En este caso, pretende el accionante la protección del derecho de petición, prerrogativa fundamental que puede ser garantizado por medio de acción de tutela, porque en el ordenamiento interno, no existe otro mecanismo de protección que resulte ser idóneo ni eficaz para conseguir tal fin.

### 4.3 Caso Concreto

El artículo 23 de la Constitución Política prevé, que, toda persona tiene derecho a presentar “*peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales*”.

El derecho de petición<sup>1</sup> es, además de un derecho fundamental *per se*, una manifestación directa de la facultad de acceso a la información que le asiste a toda persona (art. 20 Const.), así como un medio para lograr la satisfacción de otros derechos, como la igualdad, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, entre otros.

En consecuencia, toda persona puede elevar ante las autoridades públicas y organizaciones privadas, en desarrollo de derechos fundamentales, solicitudes frente a asuntos, tanto de interés general como particular, sobre las cuales se le debe responder en forma oportuna y cabal, según lo dispuesto normativamente.

La respuesta puede o no satisfacer los intereses de quien ha elevado la petición, en el sentido de acceder o no a sus pretensiones, pero siempre debe ser una contestación que permita al peticionario conocer, frente al asunto planteado, cuál es la situación y la disposición o criterio del ente respectivo.

Así, se ha advertido que se satisface este derecho cuando se emiten y reciben respuestas que abarcan en forma sustancial y resuelven, en lo procedente, la materia objeto de solicitud, independientemente del sentido. De manera que no puede entenderse vulnerado el derecho simplemente porque la contestación dada al peticionario dentro de los términos dispuestos sea negativa, pues si efectivamente atiende de fondo el asunto inquirido, se ha satisfecho tal derecho de petición.

---

<sup>1</sup> T-099/2014

Frente a las características esenciales del derecho de petición, cuyo núcleo cardinal se halla en la resolución y contestación cabal y oportuna de la cuestión averiguada, ha reiterado la Corte Constitucional<sup>2</sup>:

*“(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible; (v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares<sup>3</sup>; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición<sup>4</sup> pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa<sup>5</sup>; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder;<sup>6</sup> y (x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado.”*

Dentro de este contexto, es claro que el derecho de petición no solo envuelve la posibilidad de presentar solicitudes respetuosas a las autoridades y los particulares, en los casos señalados por la ley y jurisprudencialmente desarrollados, y efectivamente a obtener oportuna, clara, precisa y congruente respuesta de fondo, sino que es también

---

<sup>2</sup> T- 249 de febrero 27 de 2001, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.

<sup>3</sup> T- 695 de agosto 13 de 2003, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.

<sup>4</sup> T-1104 de diciembre 5 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.

<sup>5</sup> T-294 de junio 17 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.

<sup>6</sup> T-219 de febrero 22 de 2001, M. P. Fabio Morón Díaz.

garantía de transparencia. La renuencia a contestar de tal manera conlleva, en consecuencia, a la vulneración del derecho de petición<sup>7</sup>.

En el caso concreto, se advierte que el accionante indicó haber radicado una petición ante la autoridad de transporte accionada, dirigida a obtener la prescripción de comparendos que se encontraban a su nombre; y si bien recibió una respuesta favorable, la autoridad accionada no completó el procedimiento y mantuvo vigente las ordenes de comparendo en el aplicativo del SIMIT; motivo por el cual, consideró vulnerado su derecho fundamental de petición.

Frente a lo anterior, el extremo accionado no allegó respuesta alguna; a pesar de lo anterior, la entidad vinculada si ejerció su derecho a la contradicción y la defensa, a través de respuesta en donde puso en conocimiento del despacho, que lo solicitado por el accionante ya se había efectuado; pues una vez validada la información correspondiente al accionante en el aplicativo del SIMIT, los comparendos No. 1087489 y 3511, frente a los cuales se había decretado la prescripción por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Paipa, ya tenían la correspondiente anotación de “*declaración de prescripción*”.

Es por esto, que en el presente caso al evidenciar que la gestión realizada responde a lo solicitado por el accionante, deberá negarse la acción de tutela por la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado. Lo anterior es así, pues se encuentra que en efecto, la vinculada realizó las gestiones necesarias para hacer cesar la vulneración del derecho de petición incoado por el solicitante, toda vez que ha procedido a resolver de fondo la solicitud presentada.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dicho al respecto que:

*“Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de*

---

<sup>7</sup> T-077 de febrero 11 de 2010, M.P. Nilson Pinilla.

*la acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.*

*Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa actual y cierta de los mismos.*

*No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto que, la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción.”-8.*

Y en el presente caso se habla de un hecho superado, porque dentro de la contestación recibida y remitida por la entidad vinculada al requerimiento que se le hiciera, se constata que se ha complementado la gestión ordenada por la entidad accionada y con ello, se ha resuelto de fondo la petición elevada por la parte actora.

Esta situación hace que la vulneración al derecho fundamental que inicialmente había dado motivo a interponer esta acción de tutela haya sido superada, razón por la cual habrá de negarse la acción constitucional, siendo del caso recordar que sólo si la solicitud no es atendida, surge la afectación de los derechos y por ende la posibilidad de acudir a la acción especial y excepcional de la tutela, para que el juez constitucional restablezca la garantía vulnerada y si de lo que se trata es de no estar

---

<sup>8</sup> Cfr. Sentencia T-308 de 2003.



conforme con la respuesta obtenida, ello escapa a las facultades otorgadas al juez de tutela, pues está obligado al restablecimiento de los derechos pero no a intervenir en la definición del asunto o a indicar el sentido de la respuesta.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO VEINTIOCHO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ**, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

### **RESUELVE**

**PRIMERO. - NEGAR** por haberse configurado el fenómeno de hecho superado, el amparo del derecho fundamental de petición invocado por el señor **CAMILO MORALES CARRIOZA** en contra de la **SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PAIPA**, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

**SEGUNDO. - DESVINCULAR** al **SIMIT** de la presente acción constitucional.

**TERCERO. - NOTIFICAR** la sentencia de acuerdo con las previsiones del Art 30 del Decreto 2591 de 1991, en el evento de que no sea impugnada, remitir la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**Firmado Por:**

**CATALINA RIOS PENUELA**

**JUEZ MUNICIPAL**

**JUZGADO 028 PENAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO  
MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**92fbb8cfcc6ab1df1d1a93a483b47a514498356e67cc04fc4dd2aef014  
2ec0c4**

Documento generado en 04/11/2020 05:07:55 p.m.

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**